

Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, UNED, Costa Rica
<https://revistas.uned.ac.cr/index.php/espiga>
ISSN: 1409-4002 • e-ISSN: 2215-454X

Trazando el mapa de la seguridad: Efectos de los programas de ajuste estructural en Costa Rica a partir de la década de 1980

Gustavo Cabezas-Barrientos *
<https://orcid.org/0000-0003-2859-1554>

Resumen

En este ensayo se explora el efecto de los programas de reforma al ajuste estructural del Estado costarricense sobre todas las áreas del entorno social, en especial la seguridad ciudadana del país. Se destaca la relación entre la desigualdad socioeconómica y la exclusión social, con la idea de que estas son las responsables de la inseguridad y el aumento de la criminalidad, cuando en estas zonas han sido excluidas del desarrollo económico generado por estas reformas de ajuste. La falta de acceso a servicios básicos, tales como salud, educación y empleo, genera estrés financiero y preocupaciones económicas, lo que puede desencadenar conflictos familiares y comportamientos violentos. Además, se afirma que las decisiones políticas tomadas desde la década de 1980 para cambiar el modelo económico existente hasta ese momento, han contribuido con la construcción de una sociedad que acentuó las desigualdades existentes en el modelo anterior. También, se plantea que el germen de la violencia es fruto de la desregularización de los controles del Estado, lo cual favorece el crimen organizado y la violencia intrafamiliar; así, la criminalidad se convierte en un refugio para aquellos sectores excluidos y desfavorecidos. Finalmente, se identifica una correlación entre la desigualdad socioeconómica, la violencia intrafamiliar y los homicidios, destacando la compleja interacción de estos fenómenos en la sociedad costarricense.

Palabras clave: Neoliberalismo, desigualdad social, crimen, seguridad humana.

* Máster en Criminología de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), de Costa Rica. Licenciado y bachiller en Sociología y Antropología de la Universidad de Costa Rica. Desde 2013, coordinador, profesor e investigador de la Cátedra de Sociología de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED. Correo: gcabezas@uned.ac.cr

Mapping Security: The Effects of the Structural Adjustment Programs in Costa Rica since 1980

Abstract

In this essay, the effect of the reform programs to the structural adjustment of the Costa Rican government upon all the social areas, especially citizen security is explored. The relation between socioeconomic inequality and social exclusion is emphasized, with the idea that these two are responsible of the insecurity and the increase of criminality when regions have been excluded from economic development generated by these adjustment reforms. The lack of access to basic services, such as health, education and employment generates financial stress and economic preoccupations, which can lead to family conflicts and violent behaviors. Moreover, political decisions made since 1980 to change the economic model of that period have contributed with the construction of a society that stresses the existent inequalities in the former model. Furthermore, it is posed that the seed of violence is the result of the deregulation of the government's controls, which favors organized crime and domestic violence; thus, criminality becomes a refuge for those excluded and disadvantages sectors. Finally, a correlation between socioeconomic inequality, domestic violence and homicides is identified, highlighting the complex interaction of these events in the Costa Rican society.

Keywords: Neoliberalism, social inequality, crime, human security.

Introducción

Desde la década de 1980, Costa Rica ha experimentado una serie de transformaciones socioeconómicas que han moldeado significativamente su panorama político, social y de seguridad ciudadana. En este contexto, los Programas de Ajuste Estructural (PAE) del Estado han desempeñado un papel crucial, delineando las políticas económicas y sociales que han impactado de forma directa en el tejido social y la dinámica de la criminalidad en el país.

En este análisis, se propone dibujar un mapa que ayude primero a ubicar los acontecimientos desde un punto de vista histórico, para luego examinar cómo los factores socioeconómicos, en especial, aquellos derivados de los programas de ajuste del Estado, implementados desde la década de 1980, han influido en el panorama actual de la seguridad ciudadana y el crecimiento de la criminalidad en Costa Rica. Para comprender esta compleja interacción, es esencial explorar los cambios estructurales en los aspectos socioeconómicos costarricenses a raíz de las políticas públicas de ajuste surgidas en este contexto.

Esta identificación de los principales vínculos entre las políticas de ajuste, la desigualdad socioeconómica, los cambios en la estructura familiar y comunitaria son los puntos de referencia en este mapa, que ubican su relación con la delincuencia y la percepción de seguridad en la sociedad costarricense.

Este análisis proporciona los factores que han contribuido a configurar el escenario actual de seguridad ciudadana y la criminalidad en Costa Rica, ofreciendo así una base sólida para la formulación de políticas públicas orientadas a abordar estos desafíos de manera efectiva y sostenible.

¿Qué había antes y que tenemos ahora?

Para empezar, se menciona que, cuando se refiere al deterioro de las condiciones de seguridad ciudadana de la población, se debe entender la criminalidad como el conjunto de actividades delictivas o ilegales llevadas a cabo por individuos o grupos dentro de una sociedad. Estas actividades abarcan una amplia gama de conductas tipificadas, las cuales van desde delitos menores, como el hurto y el vandalismo, hasta delitos más graves como el homicidio, el tráfico de drogas o la corrupción. La criminalidad puede manifestarse de diversas formas y en diferentes contextos, ya sea en entornos urbanos o rurales, en países desarrollados o en vías de desarrollo.

Claro está, la naturaleza y la gravedad de los actos criminales pueden variar significativamente según factores como la cultura, la legislación vigente, el nivel socioeconómico y las condiciones sociales de una comunidad o país. La criminalidad no solo tiene un impacto directo en las víctimas de los delitos, sino que también afecta de manera más amplia a la sociedad en su conjunto, lo que genera un costo social que va desde socavar la confianza en las instituciones, que ocasiona miedo y ansiedad en la población, hasta la obstaculización del desarrollo económico y social. Por ejemplo, la exposición de prácticas de elusión y evasión mediante ingeniería

fiscal en el escándalo de *Los Papeles de Panamá*¹, reveló las formas en que muchas personas y empresas privaron –y privan– a los Estados de importantes ingresos fiscales, entre ellos los que posiblemente dejaron de aportarse a los cuerpos de seguridad.

La comprensión de la criminalidad implica el estudio de los antecedentes históricos que llevaron a contextos que fueron el germen de las causas, consecuencias y patrones, así como la formulación de estrategias y políticas efectivas para prevenir y combatir el crimen, promoviendo al mismo tiempo la seguridad y el bienestar de la sociedad.

No se puede decir que existe una única causa, si bien el punto de partida podría ser los Programas de Ajuste Estructural (PAE) del Estado aplicados en Costa Rica en la década de 1980 y en la siguiente, lo cierto es que las estrategias políticas y las diferentes crisis impactaron a toda una generación de personas, entre otras consecuencias, lo cual generó desafíos para la sociedad costarricense.

Para Guillermo Carvajal Alvarado², los PAE son un conjunto de medidas económicas y políticas recomendadas por organismos financieros internacionales, como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), con el objetivo de estabilizar la economía de un país en crisis. Estos programas suelen incluir políticas de liberalización económica y desregularización de los mercados³, privatización de empresas estatales, reducción del gasto público, reformas fiscales, apertura comercial, entre otras medidas⁴.

Dentro de este esquema, se buscaba reactivar la economía mediante la reducción del Estado, trasladando servicios, que usualmente realizaban instituciones públicas, a empresas privadas y cooperativas, con el incentivo de la exoneración de impuestos y, en consecuencia, cargando el costo del funcionamiento del sector público, en especial, en una nueva clase media.

Estas clases medias⁵ tradicionalmente estaban más vinculadas al sector público, debido a que el tamaño de este sector incluyó una serie de trabajadores que se

¹ Investigación periodística mundial liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. En 2016, dio a conocer los negocios *offshore* (evasión de impuestos, ocultamiento de bienes, lavado de dinero) de políticos, empresarios, deportistas y celebridades internacionales.

² Exdirector de la Escuela de Historia y Geografía de la Universidad de Costa Rica (UCR).

³ La desregulación del mercado consiste en la eliminación o reducción de las regulaciones gubernamentales que rigen un sector específico de la economía, por ejemplo, eliminación de normas y leyes para favorecer ese sector o la simplificación de trámites de procedimientos administrativos. Estas prácticas generan inestabilidades económicas como la crisis financiera del 2008 donde se desregula en EE UU el mercado de los préstamos inmobiliarios, igualmente genera menores protecciones para consumidores como, por ejemplo, el transporte mediante plataformas no tiene seguro de daño a terceros en caso de accidentes, y la desigualdad, ya que los beneficios de la desregularización no se distribuyen de forma equitativa, siendo las PYMES las más invisibilizadas de estos procesos.

⁴ Guillermo Carvajal-Alvarado, «Costa Rica en la época de los programas de ajuste estructural 1985-1992», *Revista Reflexiones* 7, n.º 1 (1993):

<https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/reflexiones/article/view/10558>

⁵ Thomas Piketty, *El Capital en el siglo XXI* (Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2014); allí define las clases medias en función de su posición en la distribución de la renta y la riqueza. Se refiere a las clases medias como los hogares que se encuentran entre el 50 % y el 90 % de la

identificaba fuertemente con su empleador, el grupo era muy amplio e involucraba no solo las instituciones conocidas (seguridad, educación y salud), sino que además participaba en el sector petroquímico, en la creación de infraestructura pública, transporte y telecomunicaciones. Es así como, después de los PAE, «la clase media dejó paulatinamente el vínculo al sector público y al sector del agro y se acercó más a las PYMES y transnacionales», es decir, esta nueva clase media está más vinculada con el sector privado⁶.

A pesar de ello, estos servicios no fueron adoptados por estas empresas privadas de servicios públicos⁷ y el alcance de las cooperativas no permitió la universalización de los servicios⁸. Para ejemplificar esta situación, piénsese en que la empresa estatal Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), la cual antes era un conglomerado de energía y telecomunicaciones, a partir de estos acuerdos empezó a limitar su accionar y se vio obligada a entrar en competencia, para ello, se dividió en dos sub empresas: una encargada de la energía eléctrica y la otra de las telecomunicaciones (ICETel), con el fin de permitir la competencia de esta última con gigantes transnacionales como Movistar (hoy Liberty) y Claro.

Siguiendo con el ejemplo, debido a la falta de servicios de telecomunicación en zonas alejadas ubicadas en el Caribe norte y las zonas indígenas, sus poblaciones más vulnerables se ven afectadas negativamente por este rezago. Singularmente, las empresas de telecomunicación en competencia, las cuales han declinado en participar en un concurso público para instalar radiobases en estas zonas. Empero, el ICETel ha optado por asumir este proyecto⁹, por lo que actualmente el sector público continúa brindando los servicios que al sector privado no le interesa asumir bajo la lógica empresarial de buscar generar capital y no perderlo. Ante este escenario, es evidente que no hay interés de estos sectores privados de actuar de manera universalista haciendo inversión en radiobases en sitios con poca afiliación. A diferencia de antes de los procesos de ajuste estructural de Estado, las entidades públicas invierten con mucho menos recursos que antes de la privatización y competencia.

Carvajal menciona que, así como en otros países de Latinoamérica, las fuerzas políticas costarricenses formularon una serie de transformaciones que implementaron, de manera complaciente, el modelo económico denominado neoliberalismo, «a pesar de las dramáticas secuelas para sectores como los obreros, artesanales, profesionales no liberales, campesinado tradicional y pequeñas empresas agropecuarias»¹⁰.

distribución de la renta. En otras palabras, son aquellos que no están ni en la parte inferior (el 50 % más bajo) ni en la parte superior (el 10 % más alto) de la distribución de la renta.

⁶ Allen Cordero-Ulate, *Clases Medias, movimientos sociales y política en Costa Rica* (San José: FLACSO, 2004), 7, https://biblioteca.flacso.edu.ar/Costa_Rica/flacso-cr/20120809032730/clases.pdf

⁷ Por ejemplo, en el sector de infraestructura MECO o Grupo Orosi; en el sector de transporte las empresas de autobuses actuales y últimamente las empresas de transporte informal mediante plataformas; y en el sector telecomunicaciones con las empresas actuales de telefonía.

⁸ Leonel Fonseca-Cubillo, «Los servicios públicos en Costa Rica ante el impacto de las políticas macroeconómicas y fiscalistas», *Revista de Ciencias Económicas* 27, n.º 1 (2009): 131-144, <https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/economicas/article/view/7124>

⁹ Fabiola Pomareda-García, «ICE instala 13 torres que dan telefonía e internet a 23.000 personas en zonas indígenas», *Semanario Universidad*, 21 de enero de 2022, acceso el 15 de abril de 2024, <https://semanariouniversidad.com/pais/ice-instala-13-torres-que-dan-telefonía-e-internet-a-23-000-personas-en-territorios-indigenas/>

¹⁰ Carvajal-Alvarado, «Costa Rica en...», 1.

Las organizaciones gremiales, como sindicatos, asociaciones de desarrollo y otras fuerzas vivas de las comunidades, representaban la defensa de las conquistas sociales que se habían obtenido mediante las luchas de la clase trabajadora en la década de 1940, anterior a los PAE, por lo que las nuevas fuerzas sociales representaban más una clase media vinculada al sector público y no a esta nueva clase media: educada, más vinculada a empresas transnacionales y pequeñas y medianas empresas (PYMES). Es por esta razón que esta nueva clase media solo representaba los intereses históricos de una parte particular de la sociedad, fallando su cometido histórico de guiar la protesta social generalizada, incluyendo a una parte de la clase media no vinculada con el sector público. Esta situación propició que muchos ciudadanos del sector privado y pequeños emprendimientos empresariales quedaran aislados y fuera de la lucha organizada. Por el contrario, pequeñas empresas de flores, hortícolas, cárnicas y de servicios tuvieron que enfrentar la lucha por la subsistencia y se vieron desplazadas por la apertura comercial que permitieron los tratados de libre comercio¹¹.

En un informe del BM de 2001, se menciona que dichas acciones de ajuste generaron una situación de desventaja en estos sectores; el mismo informe escribe: «La vulnerabilidad es compañera habitual de la privación material y humana, dada las circunstancias que tienen que soportar los pobres o quienes se encuentran en situación próxima a la pobreza»¹², por lo que no sorprende que en ese ámbito las personas empezaron a realizar grandes migraciones a centros urbanos, como en el caso de Costa Rica, donde se generaron varias oleadas de migraciones. Es así como, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), «La mayor parte de estos flujos inmigratorios hacia Costa Rica se produjo entre 1990-1999 (73,1 %), período de intensificación de las reformas económicas con agenda neoliberal»¹³.

Para continuar con el informe del Banco Mundial, se destaca la descripción de la pobreza identificada entre los años 1990-1999:

Viven hacinados en asentamientos urbanos donde las fuertes precipitaciones pueden arrastrar sus casas. Trabajan en condiciones precarias, en el sector formal o informal (...) Están expuestos a detenciones arbitrarias y malos tratos a mano de las autoridades locales. Y sufren, sobre todo las mujeres, el riesgo de verse socialmente excluidos y ser víctimas de la violencia y la criminalidad.¹⁴

¿Fue un error haber firmado los PAE en Costa Rica y luego los tratados de libre comercio con diferentes países, por ejemplo, el tratado de libre comercio con Estados Unidos (CAFTA, por sus siglas en inglés), mejor conocido como el TLC, aprobado en referéndum en el 2007?¹⁵ De acuerdo con Carvajal, la firma de tratados es un tema complejo y sujeto a diferentes interpretaciones.

¹¹ Cordero-Ulate, *Clases medias, movimientos...*

¹² Banco Mundial, *Informe sobre el desarrollo mundial 2000-2001. Lucha contra la pobreza* (Madrid: Ediciones Mundi-Prensa, 2001), 36.

¹³ Guillermo Acuña-González, *Flujos migratorios laborales intrarregionales: situación actual, retos y oportunidades en Centroamérica y República Dominicana. Informe Regional*. (San José: OIM-OIT-MTSS-CECC-SICA-OCLAD-Red de Observatorios del Mercado Laboral-AECID, 2011), 18.

¹⁴ Banco Mundial, *Informe sobre el...*, 36.

¹⁵ Para ampliar la discusión, se sugiere la siguiente lectura: «El ocaso de los dioses de la prosperidad después del TLC y en pleno bicentenario. Neoliberalismo, desigualdad y el ascenso de los populismos en Costa Rica». Acceso: <https://revistas.uned.ac.cr/index.php/espiga/article/view/3740>

Algunos argumentarían que, dadas las circunstancias económicas y financieras del país en ese momento, eran necesarios para intentar estabilizar la economía y enfrentar la crisis existente. Por otro lado, otros podrían sostener que los tratados tuvieron consecuencias negativas significativas para sectores vulnerables de la sociedad costarricense, como obreros, artesanos y campesinos, lo que podría llevar a cuestionar la conveniencia de dichos programas¹⁶.

Es importante considerar que la evaluación de la efectividad y conveniencia del ajuste estructural del Estado en Costa Rica puede depender de diferentes perspectivas y de cómo se ponderen los efectos positivos y negativos de estas medidas en la economía y la sociedad del país.

Al hacer un estado de la situación, surgen dos elementos cruciales para aportar al complejo fenómeno de la criminalidad: la desigualdad y las tensiones que los individuos tienen que pasar en el seno de sus hogares que desembocan en violencia intrafamiliar. Estas semillas, desigualdad y violencia intrafamiliar, se siembran en un terreno fértil para la criminalidad y, lastimosamente, se han dado las condiciones para que prosperen.

Tiempo de cosecha. La pérdida de la seguridad ciudadana

Este es el panorama donde, por un lado hay un proceso de disminución del tamaño del aparato Estatal mediante el estrangulamiento presupuestario¹⁷, en favor del desmejoramiento de los ejes fundamentales de la sociedad costarricense (educación, salud y seguridad); mientras, por otro lado, la desregularización de los mercados para favorecer el comercio globalizado en áreas como la libre circulación de bienes y servicios financieros produce que segmentos del comercio, antes regulado, se vean ahora con más posibilidades de emprender sin mayor restricción en otros campos. Todo pareciera ser más favorable al clima de los negocios; sin embargo, abre otras puertas que son aprovechadas por el crimen organizado.

Por ejemplo, la Ley 8204 (Reforma integral Ley de estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas no autorizadas, legitimación de capitales y actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo¹⁸), la cual genera el Decreto 36948-MP-SP-JP-H-S¹⁹, publicado en 2012 por el Instituto Costarricense contra las Drogas (ICD), menciona un listado de sustancias controladas que pueden ser usadas como precursores para la fabricación ilícita de drogas. Muchas de estas sustancias se desregularizaron por el mismo ICD, con el fin de favorecer el mercado de bienes, de forma que antes debía registrarse en la unidad de control y fiscalización de

¹⁶ Carvajal-Alvarado, «Costa Rica en...

¹⁷ El estrangulamiento presupuestario es una manera coloquial de llamar a las medidas de austeridad que restringen agresivamente el presupuesto de una entidad gubernamental, limitando de manera significativa su capacidad para operar, invertir, o cumplir con sus objetivos. Indicadores de estas medidas son los recortes presupuestarios, reducción de servicios y de su calidad, incumplimiento de objetivos institucionales, ausencia de inversión y despidos de personal.

¹⁸ Ley 8204, de 26 de diciembre de 2001, Reforma integral Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo (*La Gaceta* N° 8 de 11 de enero de 2002).

¹⁹ Decreto Ejecutivo 36948, de 8 de diciembre de 2011, Reglamento general sobre legislación contra el narcotráfico, actividades conexas, legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y delincuencia organizada (*La Gaceta* N° 12 de 17 de enero de 2012).

precursores del instituto, con esto se reportó los movimientos en la línea de producción. Sin embargo, según oficio del instituto UCFP-COM-2142-2023, hace referencia a que

cuando se trate de compra local de los productos de la lista 3 se requiere únicamente que posean un permiso de funcionamiento o certificado veterinario de operación que los faculte para el manejo de estos productos, sin que sea necesario el otorgamiento de una licencia o permiso por parte de la Unidad de Control y Fiscalización de Precursores.²⁰

Una de estas sustancias es el xileno, el cual se usa en pinturas y diluyentes; pero que igualmente se puede usar como precursor de sustancias como el *crack* y fentanilo. Desde su desregularización se han importado 5 millones de litros, dato que en sí no dice mucho; sin embargo, el portal de información de comercio exterior de Latinoamérica Veritrade²¹ menciona que el país pasó de importar en el 2019, \$3,5 millones de la sustancia, a \$6,2 millones en el 2023. En el 2019, se tramitaron 116 registros de la sustancia, empero en el 2023, a pesar de que se importaron más cantidades de dicha sustancia, dada la desregularización del producto, solo se tramitaron 95. Ese mismo año se realizaron dos decomisos de tambores de xileno en Guatemala y Honduras que disparan las alarmas sobre su uso.

Se reitera la idea: un Estado venido a menos, con débiles controles y con algunas incapacidades para redistribuir la riqueza, produce en consecuencia una falta de control efectivo sobre ciertas áreas o sectores de la sociedad. Esta situación puede generar un ambiente propicio para la criminalidad al dificultar la implementación de políticas de seguridad, la prevención del crimen organizado y la protección de los ciudadanos frente al estrangulamiento presupuestario de los cuerpos de seguridad y las cada vez más frecuentes desregularizaciones del mercado²².

Esta creciente desigualdad socioeconómica, donde el concepto de seguridad ciudadana ha sido objeto de una creciente preocupación, fruto del profundo efecto que han generado el ajuste estructural del Estado y su debilitamiento en su papel de redistribuidor de la riqueza, ha moldeado no solo las estructuras económicas y políticas, sino también las condiciones sociales y la calidad de vida de los ciudadanos.

En este contexto, surge la necesidad de examinar de forma crítica cómo las políticas neoliberales han contribuido al deterioro de la seguridad ciudadana y han erosionado las redes de protección social, ampliando de este modo las brechas socioeconómicas y generando una mayor vulnerabilidad para grandes sectores de la población. Esta realidad plantea interrogantes urgentes sobre el verdadero costo humano y social de las agendas económicas dominantes y la necesidad de repensar los enfoques hacia la seguridad ciudadana en un contexto marcado por la desigualdad y la exclusión.

²⁰ Oficio UCFP-COM-2142-2023, de 8 de diciembre de 2023, Comunicado. Dejar sin efecto circular UCFP-CIR-001-2022 (*Unidad de Control y Fiscalización de Precursores* de 8 de diciembre de 2023).

²¹ <https://www.veritradecorp.com/es/costa-rica/importaciones-y-exportaciones/mezclas-de-isomeros-del-xileno/290244>

²² Johnny Meño-Segura, *Evolución, actualidad y proyecciones del modelo político, institucional costarricense. Hacia una reforma integral que impulse más efectivamente el país que queremos* (San José: Instituto de investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica, 2003), <https://iice.ucr.ac.cr/informes/EVOLUCION5.pdf>

En Costa Rica, este fenómeno tiene como principal característica lo que se denomina *dualidad estructural*; este concepto sociológico se refiere a la coexistencia de dos realidades socioeconómicas claramente diferenciadas dentro de una misma sociedad. En esta dualidad, por un lado se encuentra un sector moderno, urbano, industrializado y globalizado, con acceso a educación de calidad, empleo bien remunerado, servicios de salud adecuados y otros beneficios socioeconómicos; mientras por otro lado existe un sector marginalizado, por lo general rural o urbano marginal, caracterizado por la pobreza, la informalidad laboral, la falta de acceso a servicios básicos y la exclusión social²³. Esta división estructural profundiza las desigualdades y perpetúa la concentración del poder y la riqueza en manos de una minoría privilegiada, mientras deja a una gran parte de la población en condiciones de vulnerabilidad y precariedad. Según el mapa interactivo del atlas de desarrollo humano del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 81,4 % de Costa Rica se encuentra en un estado de bajo o medio desarrollo, mientras que el 18,6 % se encuentra en un mejor nivel de desarrollo²⁴, hecho que se replica con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos, que ubica el coeficiente de desigualdad en 0,502, esto se traduce a que el país es donde la desigualdad se ha dado con más velocidad de la región centroamericana²⁵.

No sorprende que las zonas periféricas como las costas y zonas montañosas del país estén excluidas del desarrollo que se lleva a cabo en la Gran Área Metropolitana (GAM) que tiene muchas más opciones de trabajo, de asistencia social, educación y centros de salud.

Max Loría, en el Vigésimo informe del Estado de la Nación, en su capítulo *Evolución de la seguridad ciudadana en el 2014*, menciona que este aspecto es importante porque uno de los factores que han contribuido a la génesis de la criminalidad en Costa Rica es efectivamente la desigualdad económica y social, que puede contribuir al aumento de la criminalidad al crear condiciones de exclusión, falta de oportunidades y descontento social, que a su vez pueden llevar a comportamientos delictivos²⁶.

Esta desigualdad socioeconómica ocurre cuando se concentra la riqueza en pocas manos, por lo que la forma de distribuir dicha riqueza es mediante los servicios que da el Estado, financiados por los impuestos. Estos servicios son los mencionados como ejes del Estado social de derecho costarricense: educación, salud y seguridad. La falta de acceso o brechas a recursos, educación y empleo puede impulsar a ciertos grupos hacia actividades criminales como una forma de subsistencia o de búsqueda

²³ Gustavo Cabezas-Barrientos, Nydia Lizeth Wöltke-Trejo, Miguel Mondol-Velázquez, *Perspectivas sociológicas de la realidad costarricense* (San José: EUNED, 2020).

²⁴ Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica, *Atlas de Desarrollo Humano Cantonal de Costa Rica 2022* (San José: PNUD-EEUCR, 2022),

<https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjojYzNhNzVhZDI5YTIkNy00ZGFmLWlzMmQ0OTUxY2I0ZTg2NWVmlwidCI6ImIzZTVkYjVlLTl5NDQtNDgzNy05OWY1LTc0ODhhY2U1NDMxOSIsImMiOjh9>

²⁵ «Nivel de pobreza en hogares disminuye 21.8 % en 2023», Instituto Nacional de Estadística y Censos, acceso el 12 de abril de 2024, <https://inec.cr/noticias/nivel-pobreza-hogares-disminuye-218-2023>

²⁶ Max Alberto Loría-Ramírez, *Evolución de la seguridad ciudadana en el 2014* (San José: PEN-CONARE, 2015).

de poder. Esta desigualdad también puede traducirse en brechas en el acceso a servicios básicos como educación, salud y empleo.

Sobre esto, el desempleo puede crear un entorno en el que las personas se sienten económicamente desesperadas, emocionalmente agobiadas y socialmente aisladas, lo que puede aumentar la probabilidad de que recurran a la criminalidad como una solución percibida a sus problemas. Un empleo genera propósito y sentido de identidad, por lo que trabajar para una organización criminal se presenta como una oportunidad de validación personal²⁷.

Igualmente, y de manera más obvia, la falta de empleo lleva a dificultades económicas que pueden empujar a las personas a buscar formas alternativas de obtener ingresos, incluyendo actividades ilegales²⁸, además de causar altos niveles de estrés y problemas de salud mental, como la depresión y la ansiedad, que pueden disminuir la capacidad de toma de decisiones racionales, así como el aumento de la violencia intra familiar (en adelante VIF) en los hogares, con la consecuente normalización de la violencia, ya que las personas menores de edad la presencian y la asumen como normal²⁹.

La versión más extrema de esta es la exclusión total de la sociedad, «los sentimientos de exclusión social y marginalización en ciertos sectores de la población (...) puede llevar a la alienación y al resentimiento, creando un caldo de cultivo para la delincuencia y la violencia»³⁰. La percepción de injusticia derivada de la desigualdad socioeconómica puede generar descontento social y desconfianza en las instituciones. Esto, a su vez, puede debilitar el tejido social y favorecer la aparición de comportamientos delictivos.

Este fenómeno no es exclusivo de Costa Rica. En Centroamérica, estas medidas de ajuste del aparato estatal aumentaron la desigualdad, la reducción de la protección social y problemas sociales derivados del desempleo y la pobreza. Si bien Costa Rica implementó reformas de ajuste más graduales, con énfasis en la atracción de inversión extranjera directa y el desarrollo de zonas francas, particularmente en el sector de tecnología y servicios, otros países en Centroamérica llevan ya mucho tiempo implementándolo, con el mismo efecto. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que muchas de estas medidas de ajuste se realizaron en contextos de regímenes militares autoritarios, lo que había generado vacíos institucionales que están relacionados con la desregulación del Estado en ciertos aspectos, lo que podría contribuir a la proliferación de la violencia en la región³¹.

²⁷ Daniel Velázquez-Orihuela y René Leticia Lozano-Cortés, «El aumento del crimen y la disminución de la participación laboral en el ingreso en México», *Apuntes del CENES* 38, n.º 68 (2019): 49-78, <https://www.redalyc.org/journal/4795/479563309003/html/>

²⁸ José Joaquín Fernández, «El desempleo y la pobreza extrema empujan a jóvenes en zonas marginales a delinquir», *El Financiero*, 26 de noviembre de 2023, acceso el 15 de abril de 2024, <https://www.elfinanciero.com/blogs/la-riqueza-de-las-naciones/el-desempleo-y-la-pobreza-extrema-empujan-a/NJYFACHE6VGBJKZSQRT7ABIBF4/story/>

²⁹ Velázquez-Orihuela y Lozano-Cortés, «El aumento del...; hay una relación existente entre las áreas con altas tasas de desempleo a menudo experimentan una disminución en la vigilancia y en la inversión en servicios comunitarios, lo que puede crear un entorno propicio para el crimen.

³⁰ Loria-Ramírez, *Evolución de la...*, 27.

³¹ Mario Herrera-Rodríguez, *Homicidios en Centroamérica. Hacia una mejor comprensión de las tendencias, causas y dinámicas territoriales: Informe final de investigación* (San José: PEN-CONARE, 2019), 51.

Gobiernos extranjeros, bajo la influencia de instituciones financieras internacionales como el FMI y el BM, han experimentado como efectos inmediatos el debilitamiento institucional y de control, facilitando la infiltración de carteles de droga en instituciones gubernamentales debilitados por una evidente falta de inversión en seguridad preventiva y una mala redistribución de la riqueza. Debido a la alta demanda de drogas en países como Estados Unidos, se ha impulsado un mercado lucrativo para los narcotraficantes de la región del Triángulo Norte, dominada por pandillas que en su momento fueron inmigrantes que este mismo país deportó a Honduras y El Salvador, con instituciones estranguladas presupuestariamente. Singularmente, Estados Unidos es un importante proveedor de armas utilizadas por los grupos narcotraficantes en la región. Este flujo de armas desde Estados Unidos hacia el Triángulo Norte ha contribuido al fortalecimiento de los grupos criminales y al aumento de la violencia.

Esto no quiere decir que el crimen organizado en Costa Rica y en toda la región Centroamericana surge con este fenómeno de transformación del Estado. Este tipo de crimen ya existía antes del proceso, tales como el narcotráfico, el narcomenudeo y las pandillas. El crimen organizado está vinculado a la violencia en ciertas áreas urbanas de Centroamérica, pero es evidente los vacíos institucionales provocados por el fenómeno del ajuste estatal han sido identificados como el factor relevante en la escalada de la violencia homicida³².

No es de extrañar que el fenómeno de la violencia esté ligado siempre con este tipo de grupos (narcotráfico, narcomenudeo, pandillas organizadas) y que se expresan en el incremento de los homicidios, motivados por venganza o ajuste de cuentas, lo que sugiere conflictos relacionados con el crimen organizado y el narcotráfico³³. Esto es mucho más claro en la GAM, en cantones como Desamparados y Alajuelita, así como en los distritos de Pavas y Hatillo. Estos lugares se volvieron relevantes en cuanto a la comisión de homicidios, lo que indica una expansión de la violencia a diferentes áreas geográficas fuera de la GAM en los cantones centrales de Limón, Puntarenas y Liberia, así como en Garabito y Pococí³⁴.

En cada una de estas zonas impera la desigualdad según el estudio del PNUD ya mencionado; esta, además, puede influir en la percepción de inseguridad de la población. Las personas que viven en condiciones de desigualdad extrema pueden sentirse más vulneradas a ser víctimas de la delincuencia, lo que puede generar un mayor temor y una sensación de inseguridad en su entorno.

Esta sensación de inseguridad constante, la falta de acceso a servicios tan básicos como la salud y la educación, con apenas posibilidades de empleo genera estrés financiero y preocupaciones sobre el futuro económico de la familia. Este estrés puede aumentar las tensiones dentro del hogar y dar lugar a conflictos entre los miembros de la familia. La Encuesta Nacional de Seguridad Ciudadana en Costa Rica, resumido en el portal del departamento de Estado de Estados Unidos y el PNUD, menciona que la seguridad ciudadana es identificada como uno de los

³² *Ibíd.*, 51.

³³ *Ibíd.*

³⁴ Horacio Alejandro Chamizo-García, «Las muertes violentas en Costa Rica y sus inequidades geográficas», *Población y Salud en Mesoamérica 11*, n.º 1 (2013): 1-23.

principales problemas del país por un 65,5 % de la población, especialmente percibido con mayor temor por las mujeres³⁵.

Este estrés es producido por la incapacidad para satisfacer las necesidades básicas, tales como la alimentación, la vivienda y la atención médica, lo que construye sentimientos de frustración y desesperación en los individuos y las familias. Esta frustración se manifiesta en forma de comportamientos violentos, especialmente si los individuos sienten que no tienen control sobre su situación. En el informe *Dinámicas Territoriales de Homicidios en Centroamérica* del Programa Estado de la Nación, se identifican posibles conexiones entre la violencia doméstica y la violencia homicida en la región, en especial debido a que este tipo de violencia puede perpetuar un ciclo de violencia en las comunidades, con la normalización de la agresión y la generación de un entorno propenso a la violencia en general, incluyendo los homicidios. Dicho de otra forma, las personas menores de edad, al ser expuestas a la violencia doméstica, tienen mayor riesgo de reproducir patrones violentos en su vida adulta, lo que contribuye a esas construcciones de violencia en la sociedad en general, como los homicidios, esto genera una transmisión intergeneracional de la violencia³⁶.

Se suele mencionar que son los videojuegos, el cine, las series de TV o *las malas juntas* las que llegan a producir el fenómeno por la desensibilización a la violencia; sin embargo, si se piensa en que entre varias explicaciones posibles para un fenómeno, por lo general la más simple suele ser la correcta; la exposición constante a la violencia doméstica puede desensibilizar a las personas ante la violencia en general, lo que podría influir en la tolerancia hacia la violencia y los homicidios en la sociedad.

No por nada, tanto la violencia doméstica y la violencia homicida pueden compartir factores de riesgo subyacentes, como la desigualdad de género, la falta de acceso a servicios de apoyo, la presencia del crimen organizado y la debilidad institucional, la cual se debilitó como consecuencia del ajuste estructural del Estado. Esta situación recuerda que, entre varias soluciones para abordar un problema de seguridad, la más simple y directa suele ser la más efectiva. Priorizar estrategias y medidas simples, pero eficaces, para mejorar la desigualdad socioeconómica y la violencia intrafamiliar puede ser clave para garantizar la seguridad de la comunidad.

No es sorprendente encontrar que los jóvenes homicidas vinculados con el sicariato o el narco menudeo crecen en ambientes hostiles y responden socialmente bajo esas tensiones cotidianas, día con día desde su nacimiento. Por lo general, estos jóvenes fueron resultado de embarazos no deseados, entre padres jóvenes con una escolaridad básica, donde la mujer termina por criar sola a los infantes, ya sea con el padre biológico u otra pareja violenta, en un hogar donde la VIF es el común de cada día. En estos hogares, se encuentran padres que recurren a trabajo no calificado en sectores urbanos menos deprimidos, con infantes que acuden a sus escuelas y regresan a su hogar sin compañía y se mantienen solos la mayor parte del día, creciendo en soledad en los centros educativos bajo la ley del más fuerte, para luego

³⁵ «Resultados Encuesta del PNUD y la UCR revela percepciones sobre la seguridad ciudadana en Costa Rica», Infosegura, acceso el 15 de abril de 2024, <https://infosegura.org/noticias/resultados-encuesta-pnud-la-ucr-revela-percepciones-sobre-la-seguridad-ciudadana-costarica>

³⁶ Herrera-Rodríguez, *Homicidios en Centroamérica...*

salir al finalizar las clases a la calle con el deseo de asumir de manera temprana un rol como de adulto con el propósito de ganar independencia y sobrevivir por su cuenta³⁷.

La falta de un entorno seguro y estable en el hogar lleva a que los jóvenes busquen seguridad y pertenencia en grupos o pandillas que pueden involucrarse en actividades delictivas. La falta de apoyo emocional y la exposición a la violencia también pueden contribuir al desarrollo de problemas de conducta, como el consumo de drogas o el abuso de sustancias, que a su vez aumentan el riesgo de involucrarse en actividades criminales. Por ello, no se duda que esta realidad se ve en La Carpio, en Lomas del Río en Pavas, en Alajuelita, en Fray Casiano o el Roble de Puntarenas, en los Corales de Limón y en muchas otras localidades, donde las instituciones están limitadas en aportar entornos seguros en escuelas y colegios, alimentación, seguridad social, recreación y apoyo emocional y espiritual en momentos de crisis en el hogar, esto debido a las medidas de austeridad y estrangulamiento presupuestario³⁸.

No puede decirse que la criminalidad, la VIF y la desigualdad sean fenómenos similares, de hecho, no lo son. La violencia doméstica se refiere a cualquier forma de abuso o comportamiento violento que ocurre dentro de un entorno familiar o de pareja, mientras que la criminalidad abarca una amplia gama de conductas delictivas³⁹.

Si embargo, debido al ciclo de violencia que viven niñas, niños y adolescentes en su infancia, estos tienen mayor probabilidad de involucrarse en comportamientos delictivos en el futuro. Se puede afirmar que la exposición a la violencia doméstica puede aumentar la probabilidad de que una persona desarrolle comportamientos violentos o delictivos como mecanismo de defensa o como resultado de traumas psicológicos. Hay elementos que hacen que la violencia doméstica y la criminalidad pueden asociarse a factores de riesgo comunes, como la desigualdad socioeconómica, la falta de educación, el abuso de sustancias, entre otros, lo que puede contribuir a un mayor riesgo de comportamientos delictivos⁴⁰.

Si se toma en cuenta que una persona que haya nacido en 1999, a hoy, tendría la edad en la que los noticieros repiten que suelen tener los sicarios, las personas involucradas en el comercio globalizado de estupefacientes o el narcomenudeo local. Suelen ser cada vez más jóvenes los arrestados y todos ellos con historias de violencia intrafamiliar y abuso en su pasado; lo que lleva a detenerse y mirar el mapa de dónde se ha venido.

Se usa la metáfora de que se inicia un viaje cuyo mapa prometía una sociedad mejor que la que se deja atrás, antes del ajuste estructural. Sin embargo, se han encontrado perdidos en un terreno marcado por la sombría realidad de los homicidios, la desigualdad socioeconómica y la violencia intrafamiliar. Desde este punto de

³⁷ César Alfonso Velásquez-Monroy, «Crimen organizado, orden divergente y vecindarios vulnerables», *EURE* 36, n.º 108 (2010): 49-74.

³⁸ Meoño-Segura, *Evolución, actualidad y...*

³⁹ María Vanessa Romero-Ortiz, Jorge Loza-López y Felipe Machorro-Ramos, «Violencia del crimen organizado relacionada a los sectores económicos en México: Una propuesta de categorización», *Polis* 12, n.º 36 (2013): 477-495.

⁴⁰ *Ibíd.*

partida, entre las décadas de 1980 y 1990, se ha atravesado senderos escarpados y laberínticos, enfrentando desafíos que parecían insuperables. A lo largo de las décadas, se ha tropezado con obstáculos que han exacerbado las divisiones sociales y erosionado los cimientos de la comunidad. En esta actualidad marcada por la tragedia, se ve a las personas confrontadas con la urgente necesidad de trazar un nuevo rumbo, uno que lleve hacia la reconstrucción de un tejido social fracturado y la creación de un entorno seguro y justo para todos. Es hora de que, con determinación y solidaridad, se trace un nuevo mapa que guíe hacia un futuro, donde la paz, la equidad y el respeto mutuo sean el horizonte perseguido con firmeza.

Nuevo rumbo, es la propuesta

Repasando, se tiene un Estado post guerra civil (1950-1990) que solía atender de forma aceptable la redistribución de la riqueza, que permitió la construcción de una clase media asociada al sector público, y que, mediante los ejes de acceso a la educación de calidad, servicios de salud y seguridad tiene una posibilidad de ascenso social vinculada con la educación. En innegable que la mejora educativa se traduce en una mejor posición socioeconómica, beneficiando tanto a individuos como a la sociedad en general, al promover la equidad y el desarrollo económico.

La tasa de homicidios puede ser un indicador general de la salud de la seguridad pública en un país; ya que puede ser el efecto de un aumento en otros tipos de delitos, como el tráfico de drogas, la violencia doméstica o los crímenes organizados.

Igualmente, los homicidios tienen un efecto significativo en la sociedad y la economía, ya que pueden generar temor en la población, afectar la inversión extranjera, disminuir el turismo y aumentar los costos de la seguridad pública y la atención médica.

Por ello, es interesante observar que a partir del 2015 existe un comportamiento de aumento en la tasa de homicidios después de la década de 1990 que, si bien puede estar influenciada por una variedad de factores, es claro que algunos de ellos van desde condiciones socioeconómicas hasta políticas de seguridad pública y cambios en la estructura del Estado (Tabla 1, siguiente página). Las reformas estructurales del Estado pueden tener efectos indirectos en la tasa de homicidios a través de cambios en la eficacia de las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley, la redistribución de recursos y otros factores.

La tasa de homicidios puede estar influenciada por factores que van más allá de las reformas estructurales del Estado, como narcotráfico, migración y desigualdad social, entre otros. Además, los eventos internacionales, como conflictos regionales o cambios en el mercado de drogas ilícitas, también pueden afectar la tasa de homicidios en un país, hecho ocurrido claramente con las guerras civiles en Centroamérica; y aunque las altas tasas de homicidios que se ha tenido desde el 2015 han provocado una respuesta más enérgica por parte del gobierno y las fuerzas del orden público, no parece que dichas tasas bajen.

Tabla 1. Tasa de homicidios comparada de 1971 al 2002 y del 2013 al 2023
(Tasa por 100 000 habitantes)

Años	Tasa de homicidios	Año	Tasa de homicidios
71-72	6	2013	8.58
73-75	7.1	2014	9.85
76-78	5.7	2015	11.38
79-81	6.6	2016	11.69
82-84	4.9	2017	12.07
85-87	5.7	2018	11.61
88-90	7	2019	11.07
91-93	7.7	2020	11.13
94-96	8.9	2021	11.41
97-99	8.7	2022	12.82
00-02	7.9	2023	17.2

Fuente: Construcción propia basada en Carranza, Solana-Río e ILANUD⁴¹ y Observatorio de la violencia del Ministerio de Justicia y Paz⁴².

Estos enfoques gubernamentales se les conoce como políticas de seguridad de mano dura, los cuales priorizan medidas estrictas y punitivas para combatir el crimen y mantener el orden público. Este enfoque se puede visibilizar con la implementación de estrategias agresivas y a menudo represivas para enfrentar la delincuencia. Indicadores de estos enfoques son el uso mayor de operativos especiales y penas más severas con sentencias más largas.

Estos enfoques han sido muy populares porque proporciona una sensación de seguridad mayor; sin embargo, como se ha mencionado en diversas oportunidades en este documento, la reducción de la criminalidad solo es temporal, ya que no se han abordado las causas subyacentes, tales como la desigualdad socioeconómica y la reducción de los servicios del Estado, incremento de la pobreza, la educación de mala calidad, el acceso al trabajo y la VIF.

En Costa Rica, a pesar de la aplicación de políticas de *mano dura* como, por ejemplo, la reforma del Código Penal, con el aumento porcentual de los rangos de apuramiento (Tabla 2, siguiente página) y a pesar de la *estabilidad* de los homicidios entre el 2015 y el 2022 (ver Tabla 1), estos no dejan de crecer y se ve tasas de 17 homicidios por cada 100 000 habitantes, la cual es una tasa muy alta a nivel latinoamericano.

⁴¹ Elías Carranza, Emilio Solana-Río e Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente (ILANUD). *Seguridad frente al delito en Costa Rica: magnitud y manifestaciones de la violencia delictiva en las últimas dos décadas. 1983-2003* (San José: PEN-CONARE, 2004).

⁴² «Homicidio Doloso», Observatorio de la Violencia, acceso el 26 de mayo de 2024, <http://observatorio.mj.go.cr/tipo-de-hecho-violento/homicidio-doloso>

Tabla 2. Aumento en años en el rango de penalidad en delitos frecuentes

Artículo	Tipo penal	Rango original	Rango nuevo	Aumento % en años
11	Homicidio simple	8-15 años	12-18 años	20 %
112	Homicidio calificado	15-25 años	20-35 años	40 %
157	Violación	5-10 años	10-16 años	60 %
158	Violación calificada	8-15 años	12-18 años	20 %
159	Relación sexual con menor	1-4 años	1-10 años	150 %
161	Abuso sexual con menor	2-4 años	3-8 años	100 %

Fuente: Tomado de Sánchez⁴³; el porcentaje es elaboración propia.

Igualmente, estas políticas de castigo con enfoque represivo se ven con la creación de nuevas leyes, como la de flagrancia en 2009, reformas como la del Código Penal Juvenil, en 2012, o las de maltrato animal, en 2014, y la de acoso callejero, en 2020, solo por mencionar algunas que han sobrecargado el sistema judicial y penitenciario⁴⁴.

En otras palabras, pareciera ser que, a 40 años del ajuste estructural del Estado y las políticas de desregulación a favor de los mercados, se ha debilitado el accionar del Estado para hacer frente a la criminalidad, aquello que la desigualdad socioeconómica y la VIF empezaron a sembrar.

Este ensayo es apenas una exploración de la forma en que estas decisiones políticas pudieron desencadenar una serie de elementos que dieron las condiciones propicias para construir una sociedad desigual, inmersa en la VIF que siembra personas jóvenes desensibilizadas a la violencia, ya que no es un ambiente extraño, frustrados por no poder acceder a educación de calidad, donde ven impasibles cómo los servicios de salud van en franco declive, tal como lo señala el PNUD y el INEC.

Estas personas excluidas y en pobreza a pesar de que han sido de población reprimida, y de ser excluida por su forma de vestir o hablar, por su origen humilde o por su lugar de residencia, encuentran en los grupos criminales un espacio donde pertenecer, donde pueden subsistir y donde tienen poder y prestigio entre sus iguales.

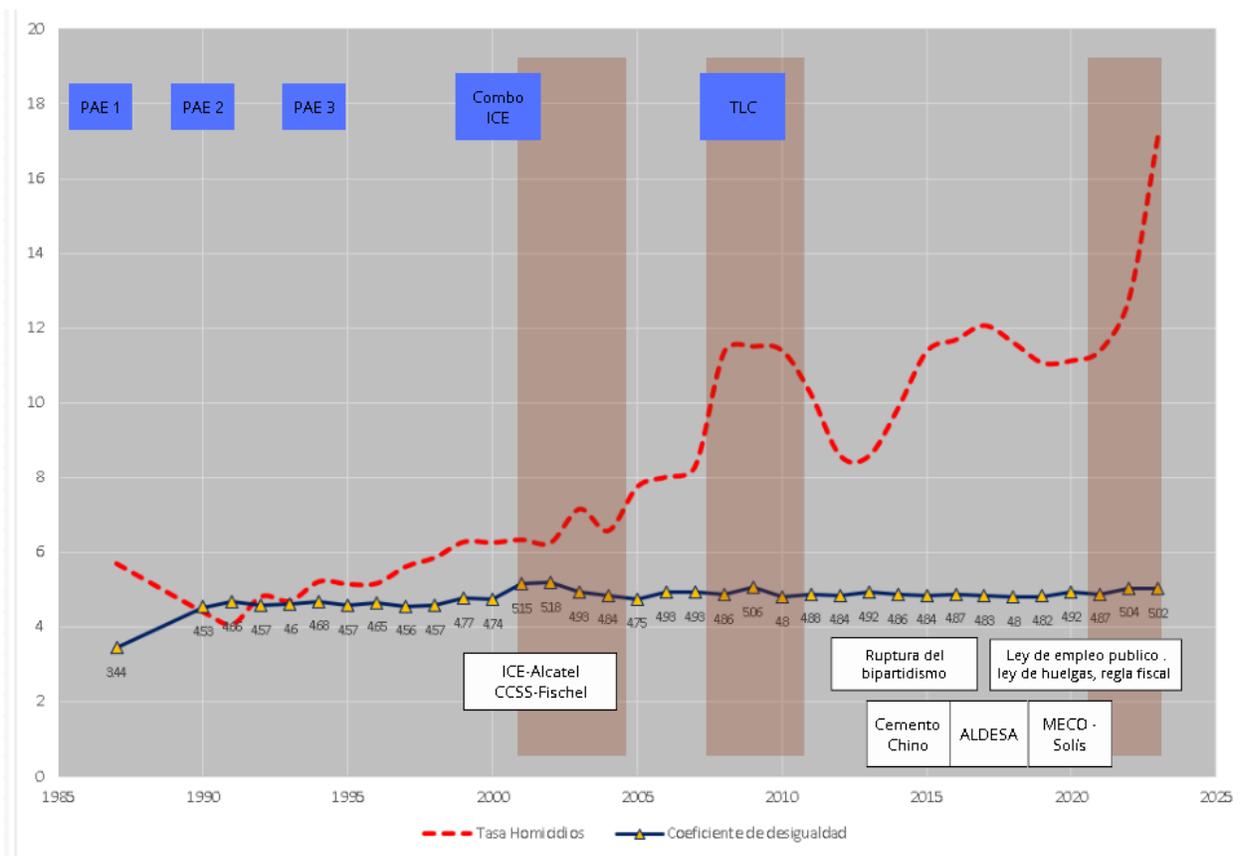
⁴³ Héctor Sánchez-Ureña, «Las reformas al código penal y sus consecuencias en las prisiones: El caso de Costa Rica», *Revista digital de la Maestría de ciencias penales de la Universidad de Costa Rica. Costa Rica*, n.º 3 (2011): 433-455.

<https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/RDMCP/article/viewFile/12416/11664>

⁴⁴ «Poder Judicial alerta por elevada cantidad de personas en celdas judiciales», Poder Judicial, acceso el 26 de mayo de 2024, <https://pj.poder-judicial.go.cr/index.php/prensa/669-poder-judicial-alerta-por-elevada-cantidad-de-personas-en-celdas-judiciales>. El presidente de la Corte Suprema de Justicia del 2021, Fernando Cruz Castro, menciona sobre la saturación de dichos sistemas: «Es una situación apremiante y angustiante pues no se está abordando esta problemática como se debe; somos respetuosos de las competencias constitucionales y legales de los Poderes del Estado, por supuesto, porque somos un Estado de Derecho. Pero esta situación está provocando un colapso del sistema penal, con suspensiones de audiencias y juicios, convirtiendo celdas que son sólo de paso, en un sitio de encarcelamiento que contraviene las exigencias internacionales sobre la privación de la libertad».

Al hacer un ejercicio, se visibiliza la correlación de estos fenómenos diferentes; la Figura 1 pone el coeficiente de Gini⁴⁵ y la de homicidios por 10 000 habitantes, donde hay una tendencia relacional entre los picos altos de homicidios con los picos altos de desigualdad.

Figura 1. Correlación entre la tasa de homicidios y el coeficiente de Gini, 1987-2023



Fuente: Elaboración propia basado en datos de infosegura.org y bancomundial.org

La Figura 1 no busca relaciones de causalidad entre el acontecimiento señalado en los cuadros y las líneas de las categorías; es evidente que cuando el coeficiente de desigualdad de Gini aumenta a más de 0.5, hay un crecimiento de la tasa de homicidios. Esta tendencia se muestra indetenible hasta hoy, donde igual que en el 2000, se tiene un coeficiente mayor a 0.5.

Esto, sin duda, ha generado efectos diversos en Costa Rica, que tanto el Estado de la Nación, el Banco Mundial y el INEC mencionan, como el acceso a la educación, la atención médica, la vivienda, la movilidad social, entre otros. De alguna manera

⁴⁵ El coeficiente de Gini o coeficiente de desigualdad es una medida estadística que cuantifica la distribución de ingresos o riqueza dentro de una población donde los valores más cercanos a 0 son menos desiguales a los valores más cercanos a 1. En el caso de Costa Rica en 1981, el coeficiente era de 0,43 al 0,5 actualmente; ese punto de más refleja que la brecha entre los ingresos o la riqueza de las personas más ricas y las más pobres se ha ampliado. Fuente: <https://inec.cr/indicadores/coeficiente-gini-persona>

también generan tensiones sociales, descontento e incluso puede afectar el crecimiento económico a largo plazo, ya que la desigualdad extrema lleva a la exclusión de una parte significativa de la población del proceso económico y social, cosa que se ha repetido a lo largo de este escrito.

Cuando existe una gran disparidad en la distribución de la riqueza y los recursos, puede surgir resentimiento, frustración y alienación en los estratos socioeconómicos más bajos. Esta desigualdad puede alimentar sentimientos de injusticia y marginación, lo que a su vez puede contribuir a tensiones sociales y conflictos.

Esto deja a la sociedad dentro de un triángulo de violencia en el que, como si fuera un iceberg, los puntos más profundos de ese triángulo son la violencia estructural y la violencia cultural. La primera es cuando por estrangulamiento presupuestario o incapacidad legal las estructuras sociales, políticas y económicas niegan la satisfacción de las necesidades básicas de las personas y generan desigualdad y exclusión. La segunda se refiere a las actitudes, creencias y valores que perpetúan la discriminación y la opresión en una sociedad, manifestándose a través de estereotipos, prejuicios y prácticas discriminatorias. Estos puntos del iceberg están ocultos bajo la superficie, pero queda el punto visible del triángulo que es la violencia directa, que es esa forma visible en la VIF y las conductas agresivas de la sociedad⁴⁶.

Es opinión de este autor que la violencia intrafamiliar y la desigualdad socioeconómica pueden alimentar esta tasa, ya sea directamente o a través de la propagación de una cultura de violencia, la formación de grupos delictivos o el acceso a armas de fuego, las personas que experimentan o son testigos de violencia doméstica, pueden desarrollar comportamientos agresivos o violentos como mecanismos de afrontamiento. Esta violencia aprendida puede extenderse más allá del entorno doméstico y manifestarse en interacciones sociales más amplias.

Aún con todos estos elementos, se puede enlazar estos fenómenos que, en conjunto, son factores que pueden crear un entorno propenso a la violencia y la inseguridad. Abordar la violencia intrafamiliar, reducir la desigualdad económica y mejorar las condiciones sociales son pasos fundamentales para construir una sociedad pacífica y segura.

Tras el horizonte de la reconstrucción social

Sin duda, el control del fenómeno de la violencia actual debe pasar por la lucha contra la criminalidad, pero al mismo momento la disminución de la desigualdad socioeconómica se puede dar con la implementación de políticas fiscales progresivas que gravan de manera más alta a los individuos y empresas de mayores ingresos, mientras se ofrecen beneficios fiscales y programas de apoyo a los grupos de bajos ingresos. Esto puede incluir aumentar los impuestos a los sectores con rentas altas y empresas que actualmente están exoneradas y utilizar los ingresos adicionales para financiar programas sociales en educación, salud y vivienda accesible. Este modelo ha sido muy exitoso en Uruguay, donde se han implementado políticas sociales

⁴⁶ Percy Calderón-Concha, «Teoría de conflictos de Johan Galtung», *Revista de Paz y conflictos*, n.º 2 (2009): 60-81, <https://www.redalyc.org/pdf/2050/205016389005.pdf>

progresivas, un sistema fiscal relativamente equitativo y ha logrado mantener bajos niveles de desigualdad en comparación con otros países de la región. Programas como el Plan de Equidad y la Reforma Tributaria han contribuido significativamente a estos resultados⁴⁷.

Igualmente, Brasil implementó programas como Bolsa Familia, que tuvieron un impacto significativo en la reducción de la pobreza y la mejora de la redistribución de la riqueza. Sin embargo, la situación económica y las políticas neoliberales del expresidente Bolsonaro han afectado estos avances⁴⁸.

Invertir en sistemas educativos que brinden igualdad de oportunidades para todas las personas, independientemente de su origen socioeconómico, está relacionado de forma directa con las políticas del Ministerio de Hacienda que deberían tomar como prioridad estos sistemas. Esto podría incluir programas de educación temprana, becas para estudiantes de bajos ingresos que les permita mantenerse en las aulas, acceso a educación técnica y profesional, así como programas de capacitación laboral para adultos. Además, promover políticas que permitan la contratación equitativa y la igualdad de salario en el mercado laboral.

La familia es una de las instituciones más relevantes de cualquier sociedad, por ello es imperativo generar apoyo no solo a los grupos familiares, sino también a las comunidades, con la implementación de políticas de apoyo a las familias, como el cuidado infantil asequible y de calidad, licencia parental remunerada y programas de asistencia social que ayuden a las familias de bajos ingresos a satisfacer sus necesidades básicas. Además, invertir en programas de desarrollo comunitario que fortalezcan los lazos sociales y promuevan la cohesión familiar.

Dado que es muy probable que la criminalidad sea fruto de la violencia intrafamiliar, se deben generar leyes y políticas que protejan a las víctimas de violencia doméstica, incluyendo la implementación efectiva de órdenes de protección y la prestación de servicios de apoyo a las víctimas, como refugios seguros y asesoramiento psicológico; el Instituto Nacional de la Mujer (Inamu), durante la administración Chaves Robles, ha cerrado muchos de los *puntos violetas*⁴⁹ que son refugios para

⁴⁷ María Daniela Alves Da Silva-Zunini, «Consecuencias de los programas de transferencias en el empoderamiento de las mujeres en hogares en situación de vulnerabilidad socioeconómica» (tesis de Maestría en Sociología y Métodos Avanzados de Investigación, Universidad de la Republica de Uruguay, 2023), https://www.colibri.udelar.edu.uy/jspui/bitstream/20.500.12008/37480/1/TMS_AlvesdaSilvaMar%C3%ADaDaniela.pdf

⁴⁸ Marcela Nogueira-Ferrario, «Los efectos del programa Bolsa Familia en el consumo familiar», *Revista de la CEPAL*, n.º 112 (2014): 151-167, <https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/08d07327-5ef4-4ea6-9e2e-93549089a78e/content>

⁴⁹ Los puntos violetas son refugios especializados para mujeres que sufren violencia de género, son espacios seguros donde se le brinda atención psicológica y asesoría legal. Según la Red Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres, la actual administración del INAMU, en el gobierno de Rodrigo Chaves, elimina la rectoría del Departamento de Violencia de Género sobre los servicios de atención desconcentrando la atención y trasladándolas a áreas programáticas no especializadas en la materia y ajenas al quehacer del Instituto que incluye estos puntos, pasando de tener 36 puntos violetas institucionales en el 2021, a tener 29 en el 2024, y creando otros «puntos violeta» como lugares de capacitación empresarial como restaurantes, comercio y servicios financieros, desnaturalizado la función de dichos puntos. <https://www.inamu.go.cr/-/mujeres-victimas-de-violencia-tendran-mas-lugares-para-solicitar-apoyo>

mujeres víctimas de dicha violencia⁵⁰. También es crucial invertir en programas de prevención que eduquen sobre las relaciones saludables y proporcionen recursos para abordar los comportamientos violentos.

Esta promoción de igualdad de género y empoderamiento de las mujeres debe existir en todas las esferas de la sociedad, incluyendo el acceso equitativo a la educación, el empleo y la participación política. Esto puede incluir la implementación de leyes y políticas que combatan la discriminación de género, así como campañas de sensibilización que promuevan el respeto mutuo y la igualdad en las relaciones familiares.

Las experiencias de otros países al frenar la desregularización y el debilitamiento de los Estados parecen tener mucho éxito, por ejemplo, los mencionados como Uruguay y Brasil, pero igualmente Sudáfrica ha abogado por ser menos austera en inversión social y por políticas más intervencionistas en la economía para promover el desarrollo y reducir la desigualdad, así como por un sistema internacional más equilibrado y multipolar, en contraposición al predominio unilateral de potencias occidentales. En adición, la experiencia negativa de los países centroamericanos que han implementado medidas de ajuste, sin bien han mejorado su economía, tienen problemas de criminalidad a puntos incontrolables solo resueltos con una muy dura represión militar, similar a la que antaño llevó a Centroamérica a múltiples guerras civiles.

Es hora de detenerse. La interconexión entre el ajuste estructural del Estado, la desigualdad socioeconómica y la violencia intrafamiliar ha delineado un panorama complejo y desafiante en la lucha contra la criminalidad. Los efectos devastadores de las políticas de austeridad, la falta de oportunidades equitativas y la desintegración del tejido social han exacerbado las tensiones y fragilidades en las comunidades.

Abordar estas cuestiones requiere un enfoque integral y colaborativo que priorice la inversión en políticas sociales, la promoción de la igualdad de género y el fortalecimiento de los lazos comunitarios.

Detenerse para ver en este mapa dónde se perdió el rumbo, para de ese modo regresar como nación al compromiso continuo con la justicia social y el bienestar colectivo, es la vía para construir sociedades más seguras, equitativas y resilientes para las generaciones futuras.

Formato de citación según APA

Cabezas-Barrientos, G. (2024). Trazando el mapa de la seguridad: Efectos de los programas de ajuste estructural en Costa Rica a partir de la década de 1980. *Revista Espiga*, 23(48), 128-151.

Formato de citación según Chicago-Deusto

Cabezas-Barrientos, Gustavo. «Trazando el mapa de la seguridad: Efectos de los programas de ajuste estructural en Costa Rica a partir de la década de 1980». *Revista Espiga* 23, n.º 48 (agosto, 2024): 128-151

⁵⁰ Sylvia Mesa-Peluffo, «El Inamu se reestructura bajo el manto del sigilo», *La Nación*, 28 de febrero del 2024, acceso el 14 de abril de 2024, <https://www.nacion.com/opinion/foros/el-inamu-se-reestructura-bajo-el-manto-del-sigilo/KDURKBPDIFFC3CWXXVRKIF5M6IE/story/>

Referencias

- Acuña-González, Guillermo. *Flujos migratorios laborales intrarregionales: situación actual, retos y oportunidades en Centroamérica y República Dominicana. Informe Regional*. San José: OIM-OIT-MTSS-CECC-SICA-OCLAD-Red de Observatorios del Mercado Laboral-AECID, 2011.
- Alves Da Silva-Zunini, María Daniela. «Consecuencias de los programas de transferencias en el empoderamiento de las mujeres en hogares en situación de vulnerabilidad socioeconómica». Tesis de Maestría en Sociología y Métodos Avanzados de Investigación. Universidad de la Republica de Uruguay, 2023. https://www.colibri.udelar.edu.uy/jspui/bitstream/20.500.12008/37480/1/TMS_AlvesdaSilvaMar%C3%ADaDaniela.pdf
- Banco Mundial. *Informe sobre el desarrollo mundial 2000-2001. Lucha contra la pobreza*. Madrid: Ediciones Mundi-Prensa, 2001.
- Cabezas-Barrientos, Gustavo, Nydia Lizeth Wöltke-Trejo, Miguel Mondol-Velázquez. *Perspectivas sociológicas de la realidad costarricense*. San José: EUNED, 2020.
- Calderón-Concha, Percy. «Teoría de conflictos de Johan Galtung». *Revista de Paz y conflictos*, n.º 2 (2009): 60-81. <https://www.redalyc.org/pdf/2050/205016389005.pdf>
- Carranza, Elías, Emilio Solana-Río e Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente (ILANUD). *Seguridad frente al delito en Costa Rica: magnitud y manifestaciones de la violencia delictiva en las últimas dos décadas. 1983-2003*. San José: PEN-CONARE, 2004.
- Carvajal-Alvarado, Guillermo. «Costa Rica en la época de los programas de ajuste estructural 1985-1992». *Revista Reflexiones* 7, n.º 1 (1993): 1-8. <https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/reflexiones/article/view/10558>
- Chamizo-García, Horacio Alejandro. «Las muertes violentas en Costa Rica y sus inequidades geográficas». *Población y Salud en Mesoamérica* 11, n.º 1 (2013): 1-23.
- Cordero-Ulate, Allen. *Clases Medias, movimientos sociales y política en Costa Rica*. San José: FLACSO, 2004. https://biblioteca.clacso.edu.ar/Costa_Rica/flacso-cr/20120809032730/clases.pdf
- Decreto Ejecutivo 36948, de 8 de diciembre de 2011, Reglamento general sobre legislación contra el narcotráfico, actividades conexas, legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y delincuencia organizada (*La Gaceta* N° 12 de 17 de enero de 2012).

- Fernández, José Joaquín. «El desempleo y la pobreza extrema empujan a jóvenes en zonas marginales a delinquir». *El Financiero*, 26 de noviembre de 2023. Acceso el 15 de abril de 2024. <https://www.elfinancierocr.com/blogs/la-riqueza-de-las-naciones/el-desempleo-y-la-pobreza-extrema-empujan-a/NJYFACHE6VGBJKZSQRT7ABIBF4/story/>
- Fonseca-Cubillo, Leonel. «Los servicios públicos en Costa Rica ante el impacto de las políticas macroeconómicas y fiscalistas». *Revista de Ciencias Económicas* 27, n.º 1 (2009): 131-144. <https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/economicas/article/view/7124>
- Herrera-Rodríguez, Mario. *Homicidios en Centroamérica. Hacia una mejor comprensión de las tendencias, causas y dinámicas territoriales: Informe final de investigación*. San José: PEN-CONARE, 2019.
- Instituto Nacional de Estadística y Censo. «Nivel de pobreza en hogares disminuye 21.8 % en 2023». Acceso el 12 de abril de 2024 <https://inec.cr/noticias/nivel-pobreza-hogares-disminuye-218-2023>
- Infosegura. «Resultados Encuesta del PNUD y la UCR revela percepciones sobre la seguridad ciudadana en Costa Rica». Acceso el 15 de abril de 2024. <https://infosegura.org/noticias/resultados-encuesta-pnud-la-ucr-revela-percepciones-sobre-la-seguridad-ciudadana-costarica>
- Ley 8204, de 26 de diciembre de 2001, Reforma integral Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo (*La Gaceta* N° 8 de 11 de enero de 2002).
- Loría-Ramírez, Max Alberto. *Evolución de la seguridad ciudadana en el 2014*. San José: PEN-CONARE, 2015.
- Mesa-Peluffo, Sylvia. «El Inamu se reestructura bajo el manto del sigilo». *La Nación*, 28 de febrero del 2024. Acceso el 14 de abril de 2024. <https://www.nacion.com/opinion/foros/el-inamu-se-reestructura-bajo-el-manto-del-sigilo/KDURKBPDIFFC3CWXRKIF5M6IE/story/>
- Meoño-Segura, Johnny. *Evolución, actualidad y prospecciones del modelo político, institucional costarricense. Hacia una reforma integral que impulse más efectivamente el país que queremos*. San José: Instituto de investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica, 2003. <https://iice.ucr.ac.cr/informes/EVOLUCION5.pdf>
- Nogueira-Ferrario, Marcela. «Los efectos del programa Bolsa Familia en el consumo familiar». *Revista de la CEPAL*, n.º 112 (2014): 151-167. <https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/08d07327-5ef4-4ea6-9e2e-93549089a78e/content>
- Observatorio de la Violencia. «Homicidio Doloso». Acceso el 26 de mayo de 2024. <http://observatorio.mj.go.cr/tipo-de-hecho-violento/homicidio-doloso>

Oficio UCFP-COM-2142-2023, de 8 de diciembre de 2023, Comunicado. Dejar sin efecto circular UCFP-CIR-001-2022 (*Unidad de Control y Fiscalización de Precusores* de 8 de diciembre de 2023).

Pomareda-García, Fabiola. «ICE instala 13 torres que dan telefonía e internet a 23.000 personas en zonas indígenas». *Semanario Universidad*, 21 de enero de 2022. Acceso el 15 de abril de 2024.
<https://semanariouniversidad.com/pais/ice-instala-13-torres-que-dan-telefonía-e-internet-a-23-000-personas-en-territorios-indigenas/>

Piketty, Thomas. *El Capital en el siglo XXI*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2014.

Poder Judicial. «Poder Judicial alerta por elevada cantidad de personas en celdas judiciales». Acceso el 26 de mayo de 2024. <https://pj.poder-judicial.go.cr/index.php/prensa/669-poder-judicial-alerta-por-elevada-cantidad-de-personas-en-celdas-judiciales>

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica. *Atlas de Desarrollo Humano Cantonal de Costa Rica 2022*. San José: PNUD-EEUCR, 2022.
<https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYzNhNzVhZDIhYlYlY00ZGFmLWlzMmQtOTUxY2I0ZTg2NWVmlwidCI6ImIzZTVkYjVILTI5NDQtNDgzNy05OWY1LTc0ODhhY2U1NDMxOSIsImMiOjh9>

Romero-Ortiz, María Vanessa, Jorge Loza-López y Felipe Machorro-Ramos. «Violencia del crimen organizado relacionada a los sectores económicos en México: Una propuesta de categorización». *Polis* 12, n.º 36 (2013): 477-495.

Sánchez-Ureña, Héctor. «Las reformas al código penal, y sus consecuencias en las prisiones: El caso de Costa Rica». *Revista digital de la Maestría de ciencias penales de la Universidad de Costa Rica. Costa Rica*, n.º 3 (2011): 433-455.
<https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/RDMCP/article/viewFile/12416/11664>

Velásquez-Monroy, César Alfonso. «Crimen organizado, orden divergente y vecindarios vulnerables». *EURE* 36, n.º 108 (2010): 49-74.
<https://www.scielo.cl/pdf/eure/v36n108/art03.pdf>.

Velásquez-Orihuela, Daniel y René Leticia Lozano-Cortés. «El aumento del crimen y la disminución de la participación laboral en el ingreso en México». *Apuntes del CENES* 38, n.º 68 (2019): 49-78.
<https://www.redalyc.org/journal/4795/479563309003/html/>

Otras fuentes consultadas

Brenes, G. Informe de notificación de datos de violencia intrafamiliar en Costa Rica - 2014. Dirección Vigilancia de la Salud Unidad de Análisis Permanente de Situación de Salud. Ministerio de Salud. Recuperado de:
<https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/biblioteca-de-archivos-left/documentos-ministerio-de-salud/vigilancia-de-la-salud/analisis-de-situacion-salud/1639-informe-violencia-intrafamiliar-2014/file>

- Capaldi, D. M., Knoble, N. B., Shortt, J. W., & Kim, H. K. A systematic review of risk factors for intimate partner violence. *Partner Abuse*, 3(2), 231-280, 2012.
- Gonzales, F. Compendio de indicadores Judiciales 2008-2012. Departamento de Planificación. Poder Judicial, 2014. Recuperado de: <https://planificacion.poderjudicial.go.cr/index.php/component/phocadownload/category/182-compendios?download=2184:compendio-indicadores-2008-2012>
- Gelles, R. J., & Cornell, C. P. *Intimate violence in families*. SAGE Publications, 1985.
- ICD. Listado de sustancias controladas como precursores o químicos esenciales 2017. Recuperado de: https://www.icd.go.cr/portalicd/images/docs/precursores/tramites/otros/Listado_de_precursores_vigente_03112017.pdf
- INAMU. Plan nacional de atención y prevención de la violencia contra las mujeres en las relaciones de pareja y familiares como por hostigamiento sexual y violación, 2012.
- Jiménez, R. Costa Rica y el tratado de libre comercio con los Estados Unidos. *Revista de Ciencias Sociales*. Universidad de Costa Rica, 2004.
- Pelfini, A. y Fulquet, G. Los BRICS en la construcción de la multipolaridad. CLACSO, 2015.
- Martinez, A. ICD indicó que en 2023 Costa Rica importó un aproximado de 5 millones de litros de xileno (2024). Portal Delfino.cr. Recuperado de: <https://delfino.cr/2024/02/instituto-costarricense-sobre-drogas-el-xileno-no-es-precursor-del-fentanilo>
- Muñoz, D. Director de ICD dice que xileno no es precursor del fentanilo; experto UCR aclara que sí puede usarse como disolvente para producir drogas. *Semanario Universidad*, 2024. Recuperado de: <https://semanariouniversidad.com/pais/director-de-icd-dice-que-xileno-no-es-precursor-del-fentanilo-experto-ucr-aclara-que-si-puede-usarse-como-disolvente-para-producir-drogas/>